



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: ARMANDO LEÓN ÁLVAREZ OSORIO
Demandado: ACP COLPENSIONES
Radicado: 05001 31 05 020 2019 00281 01
Sentencia: S-056

AUTO

Se accede a la sustitución de poder presentada por el apoderado judicial de COLPENSIONES, Dr. RICHARD GIOVANNY SUÁREZ TORRES, a favor de la Dra. LEIDY MARCELA ÁLVAREZ ROMÁN, quien se identifica con T.P. N° 278.531 del C. S. de la Judicatura; en consecuencia, se le reconoce personería judicial para actuar en los mismos términos que al apoderado principal.

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación presentado por la apoderada del demandante, en contra de la sentencia absolutoria de primera instancia emitida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín el día 13 de mayo de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

ARMANDO LEÓN ÁLVAREZ OSORIO demandó a la ACP COLPENSIONES, para que sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común desde el mes de mayo del año 2000 cuando se le notificó la calificación de pérdida de capacidad laboral de 52.3%, junto con los intereses moratorios debidamente indexados y las costas del proceso.

HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 27 de enero de 1955; que cotizó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES entre 1977 y 1995, acumulando un total de 901 semanas; que siempre gozó de buena salud hasta el 18 de septiembre de 1999 cuando al conducir una motocicleta de su propiedad sufrió un accidente de tránsito; que éste infortunado hecho le causó múltiples fracturas por las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente; que estuvo incapacitado por más de 50 semanas, quedando con secuelas de deformidad física de carácter permanente, perturbación psíquica transitoria, perturbación funcional del órgano de la marcha y del miembro inferior derecho de carácter permanente; que el entonces ISS emitió dictamen de pérdida de capacidad laboral el 2 de mayo del año 2000 determinando un porcentaje de 52.3%; y que el ISS emitió la resolución N° 3259 de 2003 mediante la cual se niega una pensión de sobrevivientes, mientras que COLPENSIONES emitió la GNR 55985 del 21 de febrero de 2017 a través de la cual se le concede una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en la suma de \$11'082.639 y la SUB 321176 del 10 de diciembre de 2018 por la cual niega la pensión de invalidez.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento del

demandante, el accidente sufrido en 1999, la calificación de pérdida de capacidad laboral realizada y las distintas resoluciones mediante las cuales se resuelven solicitudes de prestaciones económicas del sistema, advirtiendo no se cumple con el requisito de 26 semanas de cotización anteriores a la fecha de estructuración para ordenar el reconocimiento de la pensión de invalidez. Se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentación fáctica y legal. Como excepciones de fondo propuso inexistencia de la obligación, buena fe de COLPENSIONES, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 13 de mayo de 2022, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín decidió ABSOLVER a la demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra por el demandante, a quien condenó en costas, fijando como agencias en derecho el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada del demandante presentó recurso de apelación indicando que la sentencia proferida por el despacho ha omitido la obligación que tiene COLPENSIONES de haberle cumplido dejando de emitir el acto administrativo de pensión de invalidez una vez conoció sobre la pérdida de capacidad otorgada por la junta laboral del ISS; esa omisión es avalada el día de hoy por la señora Juez de primera instancia premiándolos en su negativa de reconocer los derechos fundamentales de los trabajadores como es el caso del señor ARMANDO LEÓN. No es cierto que no haya cumplido con las semanas de cotización al momento de la notificación de la calificación del 52.3% de pérdida de capacidad laboral, lo que puede verificarse en la historia laboral donde se reflejan sus aportes que a la

fecha de la calificación contaba con más de 400-500 semanas cotizadas y actualmente cuenta con 906 semanas cotizadas.

El dictamen posterior que dio COLPENSIONES es objetable toda vez que fue realizado de forma telefónica en una llamada inusual al señor ARMANDO LEÓN donde no se tuvo en cuenta toda su historia clínica. Lo propio ocurre con el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, el cual es contrario a la realidad del paciente.

El despacho manifiesta no poder pronunciarse respecto de pretensiones distintas lo cual si puede hacer buscando la protección de los derechos laborales y fundamentales del accionante pidiendo de forma extra petita la nulidad de los dictámenes que son contrarios a la realidad. Se opone a la prosperidad de condena en costas; solicita se analice el material probatorio y se le puedan garantizar los derechos fundamentales al demandante y se le pueda reconocer la pensión de invalidez a la que tiene derecho; y así mismo la pensión de vejez por cuanto cuenta con los requisitos necesarios de edad y semanas de cotización.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, la apoderada de COLPENSIONES se pronunció solicitando se confirme la sentencia de primera instancia en atención a que no se cumple con el requisito mínimo de semanas de cotización establecido en la Ley 100 de 1993.

CONSIDERACIONES:

Para acceder al derecho a una pensión de invalidez, bien sea de origen laboral o común, el afiliado debe acreditar los requisitos consagrados en los arts. 38 y 39 de la Ley 100/93 (este último modificado por el art. 1º de la Ley 860/03) los cuales indican que

tiene derecho a tal prestación quien, básicamente, sufra una pérdida de capacidad laboral por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, igual o superior al 50%, además de que cumpla con otras condiciones relacionados con el número mínimo de semanas cotizadas al sistema.

En el presente caso, el señor ARMANDO LEÓN ÁLVAREZ OSORIO sustenta su pretensión de pensión de invalidez en la calificación de pérdida de capacidad laboral realizada por el entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el día 2 de mayo del año 2000 y según la cual el porcentaje asignado fue de 52.3%.

Sobre esa situación particular, es necesario hacer una serie de precisiones con las cuales se logra llegar a la misma conclusión adoptada por la funcionaria *a quo* en su sentencia, esto es, que el demandante no cumple con las exigencias legales para que pueda ordenarse a su favor el reconocimiento de una pensión de invalidez de origen común.

En ese sentido, lo primero que se debe advertir, atendiendo al argumento principal de la demanda y en el que se insiste a través del recurso de apelación, es que a pesar de que exista un dictamen en el que se estableció que el demandante tiene la calidad de inválido en términos legales, ello por sí solo tampoco es suficiente para que automáticamente se ordene el pago de la pensión. Tal y como se advirtió inicialmente, además de acreditar una pérdida de capacidad laboral superior a 50%, es necesario el cumplimiento de las semanas de cotización que la normatividad aplicable al caso exige.

Para ese análisis debemos partir de la base indiscutida de la existencia de un dictamen de pérdida de capacidad laboral realizado el 2 de mayo del año 2000 por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en el que se estableció esa misma fecha como de estructuración de la invalidez con un porcentaje de 52.3%.

De acuerdo a lo anterior, será entonces la fecha de estructurarse el estado de invalidez del afiliado la que define la normatividad aplicable al caso, que en este asunto puntual corresponde a la Ley 100 de 1993 en su versión original, concretamente el artículo 39 en el que se observa que para el reconocimiento de la pensión de invalidez se debe diferenciar si el afiliado estaba cotizando al momento de producirse el estado de invalidez, o si se trataba de un cotizante inactivo. En el primer caso, la exigencia era simplemente acreditar 26 semanas de cotización, sin importar el momento en que dichas cotizaciones fueron realizadas; pero en el caso contrario, es decir, si el afiliado no estaba cotizando en ese momento, la exigencia de las 26 semanas debía darse con respecto al *“año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.”*

Así las cosas, como el señor ARMANDO LEÓN ÁLVAREZ OSORIO no estaba realizando cotizaciones al momento de producirse su estado de invalidez, pues además así se infiere del cuerpo de la demanda, resulta necesario acreditar las 26 semanas entre el 2 de mayo de 1999 y el 2 de mayo del año 2000, tiempo durante el cual, según la historia laboral, no tiene ninguna cotización, lo que impide entonces el reconocimiento de la pensión que se reclama.

Al respecto, no resulta admisible el argumento que se plantea en el recurso relacionado con que para ese entonces el afiliado tenía más de 900 semanas cotizadas, pues lo importante son las cotizadas al momento de la estructuración de su estado o en el año inmediatamente anterior; y en su caso particular, las cotizaciones fueron efectuadas entre 1977 y el mes de noviembre de 1997 cuando se registra la última de ellas, sin que la realización de un solo aporte aislado en el mes de febrero de 2015 tampoco tenga incidencia alguna en el resultado.

En esas condiciones, el argumento central de la demanda no tiene ninguna vocación de prosperidad y con base en él no podría ordenarse el reconocimiento de la pensión que se reclama.

De otro lado, tampoco podría desconocerse el hecho de que el demandante ha sido objeto de una nueva valoración, realizada ésta vez por la ACP COLPENSIONES y por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA en sede administrativa. La primera de ellas del 19 de julio de 2019 en la que se estableció una pérdida de capacidad laboral de 21.62% y fecha de estructuración del 15 de julio de 2019, mientras que la segunda, fechada el 15 de agosto de 2019, señaló un 34.43% con fecha de estructuración el 24 de octubre de 2018.

Resulta que esas valoraciones ni siquiera fueron informadas de manera oportuna por la apoderada del demandante, sino que se obtuvieron luego de varios requerimientos que el Despacho de primera instancia tuvo que hacerle.

Por supuesto que esas valoraciones son objetables como se indica en el recurso, pero no es precisamente eso lo que ocurre en este caso, pues nada al respecto se dijo en la demanda ni en la etapa de fijación del litigio. Es decir, la demanda no tiene como sustento el desconocimiento de esas valoraciones por supuestamente no tener en cuenta la situación real de salud del paciente, porque nada de eso se argumenta. Tampoco se solicita como prueba dentro del proceso la realización de una nueva valoración que sirva de fundamento para controvertirlas, lo que no es posible hacer con aquella de mayo de 2000 en tanto es indudable que esa no tiene en cuenta la actual situación de las patologías del señor ARMANDO LEÓN.

Y como bien lo indicó la funcionaria a quo en su sentencia, al presente caso no se aportó copia de la historia clínica del paciente, actualizada por demás, que permitiera una verificación de las condiciones de

salud en que se encuentra y la evolución de sus patologías adquiridas luego de aquel accidente ocurrido en septiembre de 1999, de modo que no se sabe con certeza si su situación empeoró, mejoró o se mantiene estable. Lo que se evidencia, según los nuevos dictámenes realizados, es que su situación de salud mejoró lo que se refleja en la calificación realizada en el año 2019.

Así las cosas, sin que exista en el plenario ningún documento que permita considerar al demandante ARMANDO LEÓN ÁLVAREZ OSORIO como una persona inválida desde el punto de vista médico-legal, no es posible ordenar el reconocimiento de la pensión de invalidez que se reclama. El único dictamen que existe al respecto, como se dijo, data del mes de mayo del año 2000 pero la fecha de estructuración allí establecida no permite el reconocimiento de la prestación.

De hecho, los dictámenes de COLPENSIONES y de la Junta Regional de Invalidez de Antioquia, aun cuando hubieran establecido una pérdida de capacidad laboral superior a 50%, tampoco servirían para reconocer la pensión en tanto no se acreditan 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración allí definida.

En consecuencia, la decisión de primera instancia en cuanto absolvió a la entidad demandada del reconocimiento de la pensión de invalidez, deberá ser confirmada.

Pensión de vejez.

La Sala considera improcedente desde cualquier punto de vista la solicitud que se presenta en el recurso de apelación relacionada con el reconocimiento al demandante de la pensión de vejez por el hecho de, supuestamente, tener acreditados todos los requisitos para el efecto.

En tal sentido, debe recordarse que el principio de la congruencia regulado en el artículo 281 del Código General del Proceso, preceptúa que la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que legalmente se contemplan. Principio de cardinal importancia procesal que ha tenido un amplio desarrollo jurisprudencial, por medio del cual se ha establecido que los jueces y magistrados tienen que fallar según lo pedido y de acuerdo con lo probado, aunque también se ha admitido como excepción que el Juzgador laboral pueda aplicar las facultades extra y ultra petita, es decir, tomando decisiones por fuera de lo pedido o más allá de ello, siempre que el tema haya sido debatido en juicio.

Respecto de las facultades de fallar por fuera de lo pedido (extra) y más allá de lo pedido (ultra), que se conceden al Juez Laboral, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse según sentencia C-662 de 1998, en la que indicó que la disposición contenida en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, es una norma que: *"... hace vigente el fin esencial del Estado tendiente a garantizar la efectividad de los principios y derechos consagrados constitucional y legalmente a las personas..."*.

Acorde con lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la del 7 de julio de 2010 radicado 38700, la 38224 del 21 de junio de 2011 respecto al principio en cuestión, o más recientemente la SL 3850 del 23 de septiembre de 2020, rad. 70515, advirtió que *"... conforme lo viene adocrinando la Sala, el juez no está limitado a la literalidad de las reclamaciones o pretensiones, sino a la fundamentación y demostración que sobre estas haga la parte actora, a quien se le impone el deber de aportar los elementos de juicio que las acrediten y conduzcan a una decisión favorable."*

Pero, de la forma como se presentaron las cosas, el objeto exclusivo de la presente demanda, y así fue establecido en la fijación del litigio, ha sido el reconocimiento al señor ÁLVAREZ OSORIO de la pensión de invalidez por considerar que tiene una pérdida de capacidad laboral superior a 50%, sin que en momento alguno se hubiera hecho referencia a la pensión de vejez; mucho que tal situación hubiera sido debatida en juicio con la garantía para COLPENSIONES del derecho defensa, de manera que es inaceptable tal solicitud y por ende frente a ello no se hará análisis alguno.

Condena en costas.

Finalmente, sobre la condena en COSTAS que le fue impuesta al demandante, basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se CONDENARÁ en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Resulta que, en este caso, la decisión tanto en primera como en segunda instancia ha sido absolutoria, lo que implica que deba entenderse como parte vencida en juicio y por ende obligada al pago de las costas procesales.

Ello implica que también en esta instancia deba ser condenada en costas al habersele resuelto desfavorablemente el recurso de apelación. Como agencias en derecho se fija la suma de \$200.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín el día 13 de mayo de 2022.

Costas en esta instancia a cargo del demandante, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$200.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **64b80834b542d5b3752c47e27922d52dd5ffb89f3bd6479b7d5d2cb5b3597f41**

Documento generado en 09/03/2023 02:51:29 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>